

Repensar la Universidad

EUGENIA MEYER

El año de 1910 constituye un hito en la vida universitaria de México. El secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes, Justo Sierra, logra que, luego de casi cincuenta años la Universidad Nacional se reabra. Todo ello enmarcado en los festejos del primer centenario de la Independencia.

Todo ello, también recupera el proyecto de los liberales que, desesperados ante la franca oposición conservadora imperante, recordaron tiempos idos como los de 1833, y clausuraron la Universidad de México en 1857, 1861 y 1865. El mismísimo Maximiliano la reabrió para luego cerrarla, haciendo suyo el sentir liberal que veía a la Universidad como ejemplo del retroceso. Y así se mantendría durante el último tercio del siglo pasado, por mandato de dos oaxaqueños: primero Juárez y luego Díaz.

Tales hechos formaban parte de una profunda disputa ideológica que rebasaba las diferencias entre liberales y conservadores, entre dos formas de pensar la nación y el futuro de los mexicanos; por ello, la vida académica corría en forma independiente dentro de las Escuelas Nacional Preparatoria, de Jurisprudencia, de Medicina y de Ingeniería. De lo que se trató entonces en un ámbito nacional fue de defender las ideas y sobre todo la libertad de expresarlas; de construir la democracia que aún hoy no hemos logrado consolidar. Era, como planteara su decreto de creación, una universidad "despojada de toda reliquia escolástica, de toda filosofía de rutina".

Parece pertinente señalar que menos de un mes después de la apertura de la Universidad, no por casualidad, arranca la primera gran revolución social del siglo XX: la mexicana. Apenas terminada la lucha armada, esa casa de estudios encontraría su lema, tan acorde con los tiempos y con la visión más plural del sentir nacionalista propio de Vasconcelos: "Por mi raza hablará el espíritu". Así también, con el correr de los años, encontramos circunstancias que parecen coyunturales sin serlo, y que van uniendo el destino del país con los acontecimientos universitarios, como fue el caso de la ley sobre la autonomía universitaria, que se promulgó apenas meses después de que los revolucionarios consolidaran sus fueros al crear el Partido Nacional Revolucionario en 1929, o bien al elaborar el Plan Sexenal que propugnaba la orientación socialista de la enseñanza y la difusión en las escuelas de "un concepto racional y exacto del universo y de la vida social", que generaría profundas polémicas en el seno de la vida universitaria.

Fueron años difíciles para la Universidad, que no recibía un presupuesto suficiente, y cuya situación resultaría aún más precaria debido a cierta animadversión del presidente Cárdenas por ella, pues durante el proceso de la llamada "reconquista de la Revolución" crearía, en 1937, el Instituto Politécnico Nacional, destinado a formar técnicos y obreros calificados. Un año después, las diferencias con el gobierno provocarían una nueva crisis en la Universidad, al tiempo que se lograban modificaciones académicas con su nuevo Estatuto General.

Con el paso del tiempo y el ingreso de México al modelo conocido como desarrollismo económico, precisamente durante los años de Miguel Alemán, un civil egresado de la Universidad y que no era miembro de la generación fundadora de la familia revolucionaria, se puso gran empeño en dotar a la Universidad Nacional Autónoma de México de un

espacio privilegiado, adecuado a la época y sin duda a las necesidades de esa modernidad inserta en la esfera del capitalismo fiero surgido tras la segunda guerra mundial.

El 6 abril de 1946, en el último año del régimen de Avila Camacho, apareció en el Diario Oficial la Ley sobre la Fundación y Construcción de la Ciudad Universitaria. Era conveniente y aconsejable brindar a los universitarios un ámbito generoso e integrar en un campus las diversas facultades y escuelas, así como conferir al alma mater una imagen moderna. También lo era propiciar una condición insular, fuera del corazón mismo de la capital, el centro, con nuevos edificios, magníficas instalaciones, y espléndidas construcciones de exuberantes colores, texturas y formas. Todo eso allá afuera, en el sur último, para tener un control más eficiente de los profesores y estudiantes, tan proclives a expresar ideas, a mantener y defender la autonomía universitaria, siempre revoltosos, siempre prestos a protestar.

Y ello era en parte razonable, porque la Universidad es el corazón mismo de la sensibilidad nacional; porque en el ámbito universitario de lo que se trató y se trata es de enseñar a pensar, no a acatar sin chistar; porque la Universidad es parte de las conquistas que supuestamente logró la Revolución; porque la comunidad universitaria pulsa y cuestiona permanentemente la realidad de los mexicanos; porque en la Universidad, mejor que en cualquier otro espacio, deben fluir las ideas, las opiniones, las contradicciones y los debates, así como también las soluciones y las nuevas propuestas para el recorrido del país. La Universidad, más que como caja de resonancia de la vida nacional, se significa por su peso político y su peso simbólico en lo que acontece a la nación; y hoy, más que nunca, parece mostrar la verdadera cara de la realidad presente y del confuso futuro. Parece, en suma, la punta del iceberg de los problemas que vive México.

El permanente flujo de ideas, la dialéctica misma entre Universidad y nación determinan el curso del país. Si, en efecto, el Estado mexicano, desde la perspectiva de su recomposición, define la enseñanza como una prioridad irreductible, es cierto entonces que los universitarios debemos pensar y repensar permanentemente qué universidad queremos y para cuál México.

Es de suyo difícil en la larga duración y lo es más aún en circunstancias coyunturales como las de ahora, pues su complejidad distorsiona la visión y las pasiones encontradas que generan impiden una mirada de conjunto, integral, cuya perspectiva permita andar caminos nuevos, hacia delante, sin solución de continuidad.

El año de 1968 marca otro hito determinante en la vida de los mexicanos y concretamente en la de los universitarios. Si el movimiento estudiantil de entonces se enfrentó con un gobierno monolítico autoritario y represivo, que hacía oídos sordos a los reclamos populares y cerraba las posibilidades de diálogo a la disidencia, justo es señalar que la oleada de expresiones de los jóvenes en todo el mundo encontró un eco propicio en México, donde el enfrentamiento se tradujo en privación de la libertad, en el mejor de los casos, y en sacrificio y muerte en el extremo.

La Constitución establece que la educación impartida por el Estado, desde el nivel preescolar hasta el secundario, debe ser pública y gratuita, aunque de hecho los mexicanos, que junto con el territorio y el gobierno somos la triada de ese Estado, la costeamos. En la práctica sabemos que el propósito de educar a todos parte de la utopía vasconceliana que aún hoy no logra su propósito. En México, muchos niños no tienen acceso ni a la educación mínima y muchos adultos aún siguen siendo analfabetas. Somos conscientes de que gran número de menores, que deberían estar en las escuelas preparándose para un futuro digno y creativo, siguen a sus padres en el arduo trabajo de subsistencia o, peor aún,

deambulan en las calles exhibiendo su miseria frente al crecimiento urbano irracional y vergonzante.

Resulta paradójico entonces que si la educación aparece como privilegio de los menos, con efectiva exclusión de los más, en la medida en que se logra la educación básica y se intenta tener acceso a niveles superiores, las desigualdades se hagan más notorias y los subsidios y las oportunidades se reduzcan a un grupo privilegiado minoritario. De hecho, somos tan pocos los que alcanzamos una educación superior que ello se torna un privilegio penoso que obliga a reflexionar sobre las causas de que el número de estudiantes universitarios sea tan pobre. Estarnos ciertos de que la población escolar del nivel superior debería crecer radicalmente, pero en la concepción liberal positivista, se crean expectativas falsas y se asigna a la Universidad el papel de gran movilizador social, puesto que procurarse educación y formación profesional supone un cambio de ingreso y de estatus.

En la medida en que la enseñanza dejó de ser una palanca de la movilidad social, en la medida en que los gobiernos adquirieron conciencia de que el objetivo debería ser otro, orientaron y apostaron hacia otras posibilidades, y hacia ellas derivaron en consecuencia buena parte de los recursos antes destinados al proceso educativo. Así podemos suponer que nuestros economistas, ocupados en el nivel macro, concluyen, por ejemplo, que si somos —y estamos condenados a ser— un país importador de ciencia y tecnología, ¿para qué necesitamos destinar recursos a la investigación y al desarrollo tecnológico?

El manido argumento de que a mayor número de alumnos menor calidad en la educación es otra de esas mentiras que a fuerza de repetirlas se convierten en verdades. ¿Cómo es posible pensar que la excelencia académica deba estar restringida a una minoría, cuando las cifras de la educación superior revelan que en México no se ha dado el fenómeno de educación de masas? Las estadísticas oficiales de 1998, según el INEGI,¹ advierten que, en el país, recibe educación universitaria —de licenciatura y posgrado— apenas un total de 1 521,000 estudiantes, o sea que ni siquiera el 1.5 por ciento de la población total de México alcanza ese privilegio en las diferentes universidades estatales, si se deja de lado, por su escasa importancia al respecto, a las universidades privadas.

Si en el caso que estamos analizando, la UNAM² reconoce una población aproximada de 270,000 estudiantes, de los cuales más de 100,000 lo son de bachillerato, ya sea de la Escuela Nacional Preparatoria o de los Colegios de Ciencias y Humanidades, ello arroja un total aproximado de 157,000 universitarios que, junto con los de la Universidad Autónoma Metropolitana, integran el bajísimo porcentaje de privilegiados en la zona metropolitana con más de quince millones de habitantes. A mayor abundamiento, hace apenas unos días fuimos informados de que sólo el 16 por ciento de los jóvenes de entre 15 y 24 años tienen acceso a la educación superior, mientras que al menos 12 por ciento de ese sector de la población carece de empleo.³

El fortalecimiento del propósito democratizador que arranca de los años sesenta vive circunstancias fundamentales en la siguiente década y se expresa en todos los niveles de la vida nacional y, aunque en forma desigual y con circunstancias complejas y plurales, la realidad actual, a finales del milenio, da cuenta de una profunda y aterradora desigualdad social, económica y política. En nuestro país, que alcanza ya casi los cien millones de habitantes, se reconoce casi la mitad de su población como de pobres y buena parte de éstos padecen una pobreza extrema. Todo ello frente a una creciente y ofensiva corrupción e impunidad en las estructuras de poder y en el gobierno.

El cisma que vive actualmente la Universidad no obedece tan sólo a razones coyunturales y menos aún a la exclusiva injerencia de los diversos intereses de partidos políticos que parecen reflejar las circunstancias económicas y preelectorales del país.

El pretexto del Reglamento de Pagos, el repudio a decisiones verticales y cupulares y la forma en que todo eso devino en un movimiento que no ha tenido parangón en la vida de nuestra casa de estudios dan cuenta de una realidad mucho más profunda y compleja.

Tampoco es posible soslayar la complejidad del movimiento estudiantil, integrado fundamentalmente por alumnos de educación media superior, que han dado muestras de cerrazón; la forma en que se han radicalizado o polarizado sus posiciones, su intransigencia y la confrontación que han tenido con los grupos externos involucrados en diferentes circunstancias y momentos. De hecho, a casi tres meses de que se suspendieron las actividades de los universitarios, quienes nos hemos opuesto al paro insistimos en volver a ellas y, por lo mismo, seguimos reclamando la devolución de las instalaciones.

La lista de reclamos y de afrentas mutuas crece; la ausencia de un diálogo efectivo y eficaz es alarmante. Una y otra partes se reprochan permanentemente y ocupadas en ello parecen olvidarse de tomar en cuenta a la comunidad universitaria toda, de llevar efectivamente a la mesa de discusión los problemas y las realidades que vive y padece, las carencias y los requerimientos de la UNAM. La crisis actual pone de relieve una realidad más profunda e impostergable: la necesidad de pensar la Universidad del futuro, la que debe formar a los nuevos mexicanos y, sobre todo, la que debe reconocerse como esencia de la vida nacional, en donde pensamos, donde aprendemos y enseñamos a pensar, a discutir y a buscar las soluciones en forma conjunta.

La estructura orgánica le ha resultado insuficiente a la Universidad y parece ajena a la realidad actual. Los órganos de gobierno resultan obsoletos, en la mayor parte de las ocasiones atienden órdenes desde arriba y están al servicio de intereses oficiales y partidistas. Existe una aterradora desprofesionalización de la planta docente, pues al respecto se han subestimado cuestiones como la vocación, el compromiso y el arraigo, además de que los maestros se hallan en una notoria desventaja económica, porque de hecho no tienen un valor de mercado reconocido y les resulta imperativo buscar trabajos múltiples, duplicar mañosamente tiempos completos o agenciarse infinidad de clases en diferentes niveles, lo cual obliga a romper todas las normas pedagógicas y didácticas adecuadas para una buena educación.

Es forzoso aceptar la inoperancia de una plantilla académica⁴ que tiene aproximadamente 80 por ciento de profesores de asignatura y sólo el 20 por ciento restante de carrera, en tanto que la planta de trabajadores⁵ asciende aproximadamente a unos 24,000, presos de un sindicalismo cuestionable. Los tiempos son otros, las circunstancias y los protagonistas diferentes. Luego entonces requerimos repensar la Universidad, reconociéndonos en el pasado, aunque buscando identificarnos con lo que viene.

El diálogo sostenido entre la Rectoría y el Consejo General de Huelga es de sordos; las múltiples expresiones de intolerancia y arrebatos de ambas partes dan cuenta, en el fondo, de la desesperanza e impotencia que amenazan la vida misma de nuestra Universidad. Dejan ver, sobre todo, la carencia de una visión amplia y de una perspectiva generosa, más allá de coyunturas e intereses de grupo.

En un país tan proclive a los rumores y a la búsqueda de culpables o chivos expiatorios, el caldo de cultivo parece estar a la orden del día. En realidad todos somos responsables finalmente: estamos involucrados los universitarios, autoridades, profesores, estudiantes y

trabajadores. Han opinado sin preguntárselo o han interferido en el conflicto los partidos políticos, algunos grupos disidentes, corporaciones civiles y religiosas.

La opinión pública, los medios de comunicación social, periodistas, informadores, organismos empresariales e intelectuales, muchos de ellos ajenos a la Universidad, a la que nunca asistieron y a la que no profesan por tanto respeto alguno, han sugerido interpretaciones diversas, algunas rayanas en el absurdo y desdeñosas de la importancia que para la vida nacional tienen la defensa y el rescate de la UNAM. Otros se quejan de que las autoridades universitarias se han caracterizado por su autoritarismo al redactar los planes de desarrollo, que los universitarios han sido marginados de la toma de decisiones al establecer los lineamientos académicos y más aún en su intento de reformas a la legislación universitaria.

Se generaliza también la idea de que los estudiantes son agitadores o ultras ajenos a la propia Universidad. Las autoridades nos han acostumbrado a sus cotidianos ultimátum y con la pérdida del semestre escolar están en peligro de repetir el cuento del pastor mentiroso al que de pronto nadie cree. Los estudiantes, por su parte, siguen agregando condiciones a su pliego petitorio y se empeñan en sostener indefinidamente el paro. Queda entonces la pregunta: ¿quién tiene prisa por resolver el conflicto? La respuesta es compleja y podría pensarse que los menos. Para las autoridades, que han cedido y concedido sin negociar, o bien lo han hecho de manera sesgada para luego buscar un extraño diálogo a partir de la representación de la rectoría, la Comisión de Encuentro, los tiempos se agotan, mientras ellos se ven cada día más aislados y lejos de la comunidad universitaria a la que quizá ya no ven ni escuchan.

Para los estudiantes quizá el tiempo no apremia, porque no tienen mucho qué perder. ¿Qué futuro les espera, qué condiciones de vida, qué ofertas de trabajo? Estos jóvenes pertenecen a una generación sin futuro que pretende tener acceso a la educación superior, sin posibilidades de desarrollo posterior en un mercado de trabajo cada vez más restringido y pauperizado. Al lado de ellos, no lo olvidemos, están todos aquellos, los más, que ya fueron expulsados del sistema educativo. Porque el discurso del México posrevolucionario insistió en vislumbrar como derecho y no como privilegio la educación superior y a partir de entonces el hijo del obrero, del campesino y del burócrata podrían ser un universitario, un profesional, tener la oportunidad que a otros antes se les negó. Sin embargo, la realidad es que ello generó expectativas y proyectos de vida poco o nada vinculados con la realidad económica y social del país.

Parece pertinente pensar en desincorporar la educación media superior del sistema universitario. Ello permitiría una gama diversa y múltiple de posibilidades. Las nuevas generaciones tendrían como meta inmediata concluir el bachillerato o sus similares. Luego, con una buena y sólida formación, podrían optar por alternativas diversas, más realistas en cuanto a las posibilidades de trabajo. Decía hace algún tiempo Antonio Alonso Concheiro que "las universidades públicas del país, y en particular la UNAM, han producido egresados buscadores de empleo y no generadores de empleo. Se estudia aspirando a que al egresar se encontrará un empleo en el sector público o en alguna empresa privada, pero no aspirando a crear una nueva empresa para desarrollar y explotar los conocimientos adquiridos y el ingenio propio [...] Podría justificarse que así haya sido en el posgrado, pero sería desastroso para el país, y para los propios egresados, que así siguiese siendo en el futuro, particularmente porque la presión demográfica y económica requerirán que México genere del orden de un millón de empleos productivos por año y seguramente el papel del sector público en ello se verá reducido".⁶

Las pérdidas más significativas no pueden cuantificarse en pesos y centavos, en semestres perdidos, en tiempos idos. La docencia y la investigación han sido profundamente afectadas, así como también la visión que la sociedad civil tiene de la Universidad, bombardeada

permanentemente con información tergiversada por intereses diversos.

En este mundo actual que avanza hacia la globalización, que se debate entre ser o no neoliberal, se observa, con incredulidad e incomprensión, el hecho de que el presupuesto que un país como el nuestro otorga a la educación apenas rebasa la mitad del 8 por ciento del recomendado para tal propósito por la Unesco. No entendemos cómo puede sacrificarse el desarrollo de varias generaciones para "salvar" de la quiebra a los bancos con una danza de millones y millones de dólares mientras nuestra universidad, la más grande del continente, logra un presupuesto anual que apenas rebasa los nueve mil millones de pesos. La realidad es que existe una tierra de nadie entre lo que las autoridades dicen querer para la vida universitaria y lo que la comunidad misma pretende como objetivos.

Si de algo debe servir este conflicto, si en verdad luego de la tormenta ha de venir la tranquilidad, ésta debe traducirse en un esfuerzo conjunto por planear la Universidad del futuro. Habrá que recuperar la vocación esencial de nuestra alma mater. Habrá que cosechar las enseñanzas que deja esta experiencia tan compleja. En un país empeñado en alcanzar la democracia, los órganos de gobierno universitario tendrán que ser precisamente más democráticos, menos verticales. La comunidad universitaria tiene derecho a ser escuchada, a participar, a pensar y a defender su institución. Las instancias de decisión deben incluir a los universitarios. Resulta poco útil tener infinidad de consejos y grupos colegiados cuyo único papel consiste en ofrecer consultoría.

Llegar a la educación universitaria es, en efecto, un privilegio, aunque también una conquista. El esfuerzo no sólo debe orientarse a las reformas que requiere la vida universitaria de acuerdo con los nuevos tiempos y las nuevas necesidades del país. Se precisan formas más democráticas de gobierno, de representatividad. También que los universitarios nos pongamos a trabajar en los nuevos pensum y curricula que rijan la excelencia académica. Esto es: no podrá planearse la Universidad del futuro a espaldas de quienes la componemos. Defendemos nuestro derecho a participar, a discrepar y a contribuir.

La calidad de la enseñanza implica también esfuerzo de los educandos y responsabilidad de la sociedad. La educación media superior y la superior siempre han tenido un costo, nunca han sido gratuitas, no querramos tapar el sol con un dedo. La Universidad requiere formas de evaluación que den acceso a la educación superior a quienes lo deseen. Habremos de defender los exámenes de admisión, los límites de permanencia, pero también habremos de demandar que los órganos de evaluación se inscriban en la propia estructura universitaria, con parámetros de medición acordes con los objetivos de la misma, y no a partir de lineamientos suprauniversitarios o valores economicistas regidos por los cambios y vaivenes de los mercados de trabajo.

La vida universitaria no puede traducirse en meros privilegios de tiempo ilimitado. Se ha logrado con esfuerzo establecer exámenes de admisión, y evaluaciones periódicas de conocimientos. Se deben actualizar tanto los reglamentos de pago como los de permanencia en la Universidad. No es posible pensar que se ingresa a la vida universitaria, que con ello se alcanza un estado de limbo y que por ende se puede permanecer en él por tiempo indefinido.

Repensar la Universidad ciertamente obliga a reconocer que tenemos una agenda pendiente donde figuran, entre otros temas de importancia, la conveniencia de separar la educación media superior de la formalmente universitaria, la eficiencia terminal de programas e instituciones, los costos unitarios de educación superior, la pertinencia de los programas que los jóvenes encuentran en la oferta de educación superior, la acreditación de programas educativos y la certificación de profesionales.

De igual forma, habrá que atacar problemas fundamentales como los bajísimos índices de titulación, las causas de la deserción, los altos costos por estudiante y la adecuación de los programas tradicionales de licenciatura y de posgrado a las necesidades reales del país. Pero también hay que replantearnos los compromisos de la Universidad con la sociedad y con el futuro de México. Qué tipo de universitarios se requieren, para qué México, en el nuevo milenio que trae aparejadas nuevas y complejas situaciones en la economía y en la política. Es verdad que la historia no se repite, pero los ciclos históricos parecen tener un compás y una cadencia que obliga a reflexionar en cuanto al caso mexicano, respecto a si los procesos que han marcado rumbos y transformado la nación, registrados con una puntualidad sorprendente cada cien años —1810 y 1910—, nos colocan acaso frente a un nuevo cambio revolucionario que habrá de ocurrir en torno al 2010.

La autora es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y Premio Universidad Nacional en Docencia en Humanidades 1998.

Notas

1 Véase Educación. Alumnos inscritos al inicio de cursos según nivel educativo. 1990/91-97/98, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, México.

2 La Agenda estadística UNAM, 1997, informa que la población estudiantil era de 268,615, de los cuales 105,913 eran estudiantes de bachillerato, 141,636 cursaban la licenciatura y 16,491 estaban inscritos en el posgrado.

3 Véase "Reto democrático para el siglo 21", en Reforma, domingo 11 de julio de 1999, p. 16A.

4 La Agenda estadística antes mencionada se refiere un total de 29,979 integrantes del personal académico, con 3,840 ayudantes, 20,217 profesores de asignatura, 4,890 de carrera y 1929 investigadores. Calcula una población de 1,286 técnicos académico-docentes, de 1667 técnicos académicos e investigadores y de 89 más en el rubro de "otros".

5 Para el mismo año la Universidad contaba con 23,113 trabajadores de base, 3,428 de confianza y 836 por honorarios.

6 Antonio Alonso Concheiro, "La UNAM en cifras y no tanto. Tumbos, trayectos y rumbos", en Este País, núm. 69, diciembre de 1996, p. 12.